



Documentos de coyuntura del Área de Política (IDH-UNGS)

IDH | Instituto del Desarrollo Humano - Área Política

Documento

05

*Alrededor de la jaula:
el sindicalismo ante
el gobierno de Macri*

Martín Armelino

Documentos de coyuntura del Área de Política (IDH-UNGS)

Documento

05 | *Alrededor de la jaula:* el sindicalismo ante el gobierno de Macri

<i>Alrededor de la jaula:</i> el sindicalismo ante el gobierno de Macri	3
Salarios, empleo y protesta.....	4
La reunificación de la CGT	5
Modalidades sindicales	8
La organización del descontento.....	9
Palabras finales	10

Documentos de coyuntura del Área de Política (IDH-UNGS)

Documento

05

Alrededor de la jaula: el sindicalismo ante el gobierno de Macri

Martín Armelino

Desde Hangzhou, la ciudad china donde se realizó a comienzos de septiembre la reunión anual del grupo de las veinte principales economías del mundo (G-20), el presidente Mauricio Macri respondió sorprendido a la pregunta por la posible reapertura de las negociaciones colectivas. “¿Cómo se van a abrir [las paritarias] si ya se negociaron?”, y agregó a modo de justificación de su negativa: “Y la inflación va a la baja”. Toda una definición del presidente, considerando que el salario en el sector privado se había contraído ya un 12% en junio con respecto a diciembre de 2015. El rumor en torno a una nueva ronda de negociaciones salariales se ha instalado, sobre todo, porque ha habido sindicatos que firmaron sus acuerdos sólo por un semestre y ahora se disponen a revisar sus porcentajes, frente a la mayoría de las organizaciones que firmaron aumentos anuales entre el 30% y el 35%. Como la inflación estimada para fin de este año ya está instalada alrededor del 45%, son varios los sindicatos que buscan la reapertura de las paritarias en sus sectores. Acaso estimulado por la distancia geográfica y temática del G-20 con la agenda cotidiana de la Argentina, Macri le dio la pincelada final al cuadro de situación en que se desarrollarán las relaciones entre el gobierno, los sindicatos y demás actores del mundo del trabajo en los próximos meses.

Sus declaraciones ocurrieron pocos días después de la finalización multitudinaria de la Marcha Federal, organizada por las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (la CTA-Autónoma y la CTA de los Trabajadores) junto a más de un centenar de sindicatos, organizaciones sociales y partidarias, decididas una vez más a darle cauce al malestar generalizado, y de la reunificación de la Confederación General del Trabajo (CGT), decidida a apurar tanto gestos de diálogo con el estado como de articulación con organizaciones sociales y políticas que gestionan la supervivencia de los trabajadores informales y desocupados.

Este documento aborda la coyuntura actual en la que se desenvuelven las relaciones entre gobierno y sindicatos. El gobierno ha dado un renovado impulso hacia el neoliberalismo y la respuesta sindical no ha sido uniforme. Las sospechas que pueda generar Macri entre los sindicalistas no se han traducido en un rechazo generalizado que lo considere anti-obrero o anti-sindical, dado que por el escaso tiempo de su gestión goza todavía del beneficio de la ambigüedad en torno a las iniciativas que adopta. Los sindicatos están acomodándose a la nueva situación, que los enfrenta, en el corto plazo, a un cambio en el talante de la política económica y de las alianzas políticas que habrán de sostenerla, y, en el largo plazo, a una transformación estructural aún en curso del mercado de trabajo, que desde la década de 1990 impacta sobre las formas de agremiación de ese universo heterogéneo que hoy componen las clases trabajadoras, y sobre las lealtades políticas que se renuevan alrededor de ellas. El documento plantea que las estrategias desplegadas por las cúpulas sindicales en este escenario responden a distintas modalidades de sindicalismo, que influyen en el

tipo de respuestas gremiales con que defienden a los trabajadores. Los sindicatos de la CGT están ceñidos al sector formal del mercado de trabajo y tienen un vínculo más parsimonioso con el sector informal, mientras que los distribuidos en las dos CTA hacen pie en ambos sectores procurando representaciones de nuevo tipo.

Esas respuestas tienen lugar, ahora, en un cuadro de mayor conflictividad laboral y en el que adquirirá mayor espesor el conflicto social. Esto será así tanto por el conjunto de medidas de ajuste económico y desincentivo sobre la actividad industrial desplegadas en estos pocos meses de gobierno, que golpean al corazón de las clases trabajadoras y populares de los principales centros urbanos, como por la presencia de una densa trama organizativa que canaliza este malestar y que ya ha dado muestras de importantes niveles de coordinación del descontento. Por fin, esto plantea interrogantes sobre cómo tramitará la política laboral este gobierno y sobre cómo será la coordinación organizativa de la contienda política.

Salarios, empleo y protesta

En torno a las relaciones laborales, si nos regimos por la legislación vigente en la Argentina, la palabra presidencial sólo debería referir a los empleados de la administración pública nacional, que están bajo su dependencia. El régimen argentino de relaciones laborales no faculta al estado a dictar la apertura y cierre de las negociaciones colectivas sino a promulgarlas una vez que empresas y sindicatos han arribado a un acuerdo. Dicho de otro modo, las marchas y contramarchas alrededor de la negociación colectiva están, legalmente, restringidas al desarrollo de las relaciones entre las partes, y el estado oficia de árbitro. Sobre los planteles del Poder Ejecutivo Nacional distribuidos en los ministerios y demás organismos descentralizados, por ejemplo, el Presidente puede desestimar la reapertura de la negociación colectiva porque en esa relación él es el titular de la parte empleadora. Sin embargo, está claro que la pregunta al Presidente aludía al conjunto de los trabajadores, empezando por los de la industria y los servicios del sector privado que marcan el ritmo de estas negociaciones, y la respuesta que de él se esperaba (al margen de cuál fuere) era una que influyera sobre el desenvolvimiento próximo de las negociaciones salariales y laborales.

Así, tanto al margen de la legislación como de quién ocupe el cargo presidencial, hay una influencia concreta de la palabra presidencial sobre la dinámica de la negociación colectiva. La performatividad de los dichos de Macri, en este caso, queda demostrada por el hecho de que los propios interesados le otorgan a su negativa una suerte de consecuencia institucional: no habrá reapertura de las convenciones colectivas. Entonces, los empresarios se distienden y los trabajadores amenazan con alterar la paz laboral. Aunque un histórico abogado de los sindicatos como el actual diputado Héctor Recalde y varios sindicalistas hayan buscado restarle peso a aquellas declaraciones señalando cuál es la responsabilidad del Presidente en torno a la negociación colectiva, saben incluso que la agitación sindical posterior queda ampliamente legitimada con este tipo de intervenciones. Esto es así porque lo señalado en estas circunstancias por Macri se inscribe en el desenvolvimiento habitual de las relaciones laborales en nuestro país, cuyas instituciones han sido fundadas desde la cúspide del estado y en un tiempo en que ese estado gravitaba mucho en la economía (y por lo tanto en la distribución del ingreso). Desde entonces, el modo como se han comportado el estado, los empresarios y los sindicalistas en torno a la negociación colectiva los ha acostumbrado a una práctica en la que los gobiernos establecen la pauta inflacionaria y los otros actores dirimen la pulseada distributiva, procurando acercar al gobierno a sus intereses. En los años kirchneristas hubo una explícita asociación entre estado y sindicatos en detrimento de los empresarios, que con matices se prolongó hasta el final; ahora se da la asociación inversa.

Apenas iniciado el año, el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay afirmó que la inflación para todo 2016 oscilaría entre el 20% y el 25% y estimó que las convenciones colectivas deberían acompañar tales proyecciones para controlar, precisamente, la inflación. “Creo que cada paritaria discute lo que puede discutir y acá no es solo la dimensión del salario sino también cuidar el empleo”, deslizó el ministro, y a modo de cierre del asunto advirtió: “Me parece que cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato”. Su desdeñosa provocación encerraba, no obstante, una cuota de verdad, pues fue ése el marco dentro del cual se desarrollaron las negociaciones colectivas en los diferentes sectores. Sus resultados dependieron del

poder de fuego de los sindicatos para salir mejor parados frente a unas cámaras empresarias explícitamente apoyadas por el gobierno para endurecer el regateo y amenazar con despidos.

Contra el telón de fondo de los años kirchneristas, caracterizados por la condena al neoliberalismo, la revalorización del mercado interno a través de la industria nacional y de la expansión del consumo y el fortalecimiento del mercado de trabajo y de sus instituciones tutelares, las iniciativas del gobierno actual buscan recuperar el ímpetu de la apertura económica indiscriminada de la década de 1990 para revertir ese escenario. Acaso el pago a los fondos buitres, resuelto hacia fines de marzo, fue en ese sentido la señal más fulgurante, pero también hubo otras desde comienzos de la gestión, no menos impactantes para el grueso de la población: junto con la reducción (o eliminación, según los casos) de las retenciones a las actividades extractivas (agronegocios y megaminería), que implicó una transferencia de recursos a los principales sectores exportadores, se dispuso el aumento de las tarifas de los servicios básicos en forma indiscriminada, lo que dificultó su pago por parte de usuarios residenciales, pymes y cooperativas locales, y se despidió de la administración nacional a miles de trabajadores con el pretexto de la necesidad de desprenderse de una porción de contratos de empleo ligados a la militancia kirchnerista (básicamente, de La Campora), que habra distorsionado el volumen requerido para el desenvolvimiento eficiente del estado. Rapidamente quedo en evidencia la puerilidad de ese argumento: el gobierno liquido reas y redujo planteles que han recortado el alcance estatal sobre ciertas esferas de la politica social y tecnologica, incentivo a los gobiernos provinciales a seguirlo en el ajuste y aliso el camino para que las cesantas y despidos se produjeran por fin en el sector privado. En estos nueve meses se han perdido mas de 120.000 puestos de trabajo y habra mas, a juzgar por nuevas declaraciones del ministro de Modernizacion Andres Ibarra sobre un plan para resolver el sobredimensionamiento del empleo estatal y optimizar su dotacion; asimismo, casi un millon y medio de personas ha caido en la pobreza, segun datos del renovado INDEC.

Respecto de la politica laboral, ha habido medidas oficiales poco auspiciosas para los trabajadores. El ejecutivo veto la denominada “ley antidespidos” con que sindicatos y legisladores de la oposicion haban procurado, durante mayo, obstaculizar desde el parlamento la escalada del desempleo en tan pocos meses. Tambien durante mayo se firmo un acuerdo entre el ministerio de Trabajo y la cadena de comidas rapidas McDonald’s, por el cual la empresa se comprometo a incorporar 5.000 trabajadores jovenes “pertenecientes a sectores en vulnerabilidad social”, bajo la figura de “practicantes”. Segun el ministro de esa cartera, Jorge Triacca, el convenio tena por fin contribuir a la promesa de campana de la “pobreza cero” en la Argentina. Sin embargo, el convenio fue objetado en los tribunales del Trabajo por un grupo de diputados nacionales del Movimiento Evita junto a la secretara de la Juventud de la CTA de los Trabajadores, quienes reclamaron su nulidad porque consideran ilegal que los flamantes trabajadores cobren un sueldo (\$ 4.500) inferior al monto del salario minimo, vital y movil (de \$ 6810, desde el 1 de junio). Asimismo, el gobierno envio al Congreso Nacional en septiembre un proyecto para la creacion del Plan Primer Empleo, que consiste basicamente en una serie de exenciones impositivas para las empresas que incorporen a jovenes de entre 18 y 24 anos por tres anos.

Por detras de estas propuestas se cuele un proyecto mas ambicioso de flexibilizacion de las relaciones laborales para abaratar costos a las empresas y suprimir garantas a los trabajadores. Dado que el propio Presidente y la mayora de su elenco ministerial proviene del mbito empresarial, no asombra que en el horizonte de sus expectativas emerja el fortalecimiento de la inversion privada por sobre el de la inversion publica como motor de la economa. Las medidas economicas adoptadas hasta ahora tienen ese sesgo y la inversion privada que ellas promueven esta destinada, o bien a la especulacion financiera, o bien a las actividades de exportacion. En este ultimo caso, como es sabido, la meta de este tipo de inversiones esta puesta en el mercado externo en vez de en el interno; por lo tanto, como el mercado esta afuera, se refuerza el enfoque sobre los trabajadores y los salarios como meros costos y no como soportes del consumo y del mercado interno.

La reunificacion de la CGT

A comienzos de agosto, con la tension alta por el tarifazo y el incremento de la inflacion, el desempleo y la conflictividad en distintos sectores, el gobierno anuncio la devolucion a los sindicatos de unos 29.000 millones de pesos, provenientes de los aportes para el sistema de obras sociales que administran los sindicatos. Dichos

fondos habían sido retenidos por el estado en 2002 y desde entonces eran reclamados por los sindicalistas en los pasillos oficiales. La medida fue anunciada poco antes de la reunificación de la CGT, donde se alistan la mayoría de los sindicatos que gestionan grandes obras sociales y de los sindicatos periféricos asociados con empresas de medicina prepaga que participan de los negocios en torno a la prestación de salud, y los términos del acuerdo de recobro fueron el resultado de más de dos meses de trabajo entre funcionarios y sindicalistas para definir su distribución escalonada hasta 2020. En la ceremonia donde Macri realizó el anuncio estaban sentados en primera fila algunos dirigentes sindicales: Armando Cavalieri de los empleados de comercio, Gerardo Martínez de los obreros de la construcción, Andrés Rodríguez del sindicato de la administración pública nacional más numeroso (UPCN) y José Luis Lingeri de los trabajadores de Obras Sanitarias, a quien Macri felicitó explícitamente por haber sido el artífice del acuerdo. Importa señalar que en diciembre pasado Macri había designado al frente del organismo que regula y controla el circuito de fondos entre el estado y las obras sociales (la Superintendencia de Servicios de Salud) a un hombre de este sindicato, que había sido hasta entonces el director médico de su obra social.

Los sindicalistas que participaron en la ingeniería de este laborioso acuerdo poseen una gimnasia envidiable para la planificación de negocios con el estado y los respalda una larga trayectoria en la gestión conjunta de cuantiosos recursos. Están ejercitados en la conquista de este tipo de beneficios organizativos e institucionales, propios del intercambio político que inspiró el neocorporativismo europeo pero *a la argentina*. Esto es, uno que no permuta moderación salarial por política social sino que intercambia moderación por beneficios tales como la ubicación de su personal en la dirección de oficinas estatales afines a los temas gremiales, la preservación (o innovación) de prerrogativas en la legislación laboral y sindical, la recepción de recursos financieros mediante subsidios o la administración de determinadas funciones estatales.

Dentro de ese cuadro de conflictividad social creciente y de expectativas por este acuerdo ha tenido lugar la reunificación de la CGT, modelo 2016. La reunión de sus tres fracciones prolonga de alguna manera diferencias no saldadas y explícita la ausencia, aún, de un liderazgo capaz de sortear estas disputas. Una alternativa de último momento surgió en la figura del líder de los empleados bancarios, Sergio Palazzo, que capitaneó en el proceso de reunificación una línea más combativa, organizada bajo el nombre de Corriente Federal de los Trabajadores Argentinos. Desde hace años, Palazzo viene liderando pulseadas salariales y laborales que influyen en otros sectores, pues el suyo es un ámbito típico de empleo calificado, y su sindicato hizo punta en la confrontación con el gobierno al lograr la reincorporación de los despedidos en el Banco Central luego de más de dos meses de medidas de fuerza que incluyeron paros, movilizaciones y acampes en el edificio mismo del conflicto, y represión policial. Pero ni el grupo que encabeza tenía a fines de agosto la gravitación de los otros tres para alcanzar la jefatura de la CGT, ni su perfil parece encuadrarse en el marco de prudencia neocorporativa que anima a las otras tres corrientes como para auparlo. Esto incluso rige para el ala más confrontativa que podría surgir del triunvirato, expresada por el sector de Hugo Moyano a través del dirigente del Sindicato de Dragado y Balizamiento Juan Carlos Schmid.

En ese sentido, la unidad de esta CGT no parece buscar la acumulación de fuerzas requerida en otras circunstancias, en las que se ven amenazadas garantías o privilegios organizativos del sindicalismo. Por ahora, las medidas del gobierno no están afectando a los sindicatos, sino los trabajadores a los que ellos representan. A juzgar, entonces, por lo acontecido en estos meses, la impresión que se tiene es la de unos sindicatos reagrupados para asegurarse un flujo de recursos antes de que los tiempos de sequía se propaguen sobre la estructura de sus negocios. En paralelo a esta ronda de acuerdos corporativos, unifican posiciones en torno a las reivindicaciones salariales y laborales de los trabajadores.

Los gobiernos sacan provecho de este tipo de acuerdos porque los sindicatos con los que los firman son los que afilian al sector privilegiado de trabajadores registrados por las instituciones laborales de las industrias, servicios privados y públicos que definen la pulseada distributiva; en consecuencia, su accionar es clave para controlar las metas inflacionarias y la marcha de la economía. En este caso, el gobierno de Macri se beneficia más con la unión que con la división de los sindicatos de la CGT, porque logra con menor esfuerzo el compromiso uniforme de la mayoría de los grandes sindicatos en torno a la paz laboral a través del reparto diferido de beneficios y porque a través de ellos les fija un techo a los reclamos mucho más insatisfechos de los trabajadores no registrados que conforman el creciente y heterogéneo universo del empleo precario.

Qué mejor ejemplo de ello que las reiteradas reuniones que están realizando distintos funcionarios con “la CGT reunificada”.

Es cierto que la acción contenciosa de un sindicalismo unido puede alcanzar mayor impacto si corren peligro sus intereses organizativos frente a la intensificación del malestar laboral y social. Si Macri pone en riesgo estos u otros acuerdos, rápidamente habrá una respuesta conjunta. Pero no es menos cierto que, en un contexto de conflictividad progresiva y con tales negocios entre manos, un sindicalismo unido también puede maniobrar con mayor eficacia la protesta surgida desde abajo. Tanto las decisiones surgidas del Comité Central Confederado que la CGT realizó pocos días después de su unidad como las decisiones surgidas del encuentro de varios de sus dirigentes con los ministros Triacca y Prat Gay en la cartera laboral hacia fin de septiembre dan cuenta de esa destreza para dosificar la confrontación. En el primer caso, el Confederado de la CGT autorizó a su conducción colegiada a tomar “las medidas convenientes en los momentos que se crean oportunos”; en el segundo, los sindicalistas reclamaron al gobierno un bono de fin de año que abarque a jubilados y beneficiarios de planes sociales y la eximición del impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo de diciembre como moneda de cambio para aplazar la convocatoria a una huelga general. Sobre la pérdida de puestos de trabajo no ha habido comentarios.

Estos dilemas sindicales son propios del reacomodamiento inevitable de los actores sociales y políticos ante un cambio de gobierno. Mucho más si ese gobierno encara desde un principio una serie de iniciativas económicas con impacto directo sobre la mayoría de la población, que a la sazón integra el universo de los trabajadores en sus distintos nichos y escalas. Las diferentes opiniones entre los propios sindicalistas que participaron en la reunión con Triacca y Prat Gay dan cuenta de la ambigüedad con la que, por estos meses, los sindicatos observan todavía a Macri y a las políticas de su gobierno. Una ambigüedad que, incluso contra su voluntad, el propio gobierno alimenta. Por ejemplo: se acuerda la devolución de los fondos de las obras sociales para atemperar a las organizaciones con mayor poder de fuego sobre la economía. Pero eso no alcanza, porque los jefes sindicales tienen que responder también a sus afiliados por la pauperización salarial y la amenaza del desempleo. Entonces estos jefes sindicales le suben un poquito el precio a la paz laboral y le regatean al gobierno otras reivindicaciones menores, como las reseñadas recién, que ayudan a descomprimir el malestar.

Conviene tener presente que los jefes sindicales atienden más de un mostrador y, por lo tanto, es inevitable que al atender uno de ellos le den la espalda (o por lo menos le tengan que pedir paciencia) al resto. Los acuerdos entre cúpulas en la cumbre del poder, como el celebrado poco antes de la reunificación de la CGT, condiciona el comportamiento de sus sindicatos, pero no lo determina. Pocos días después de la reunificación de la CGT y del inicio su ronda de reuniones en los ministerios, su triunvirato conductor inició en paralelo otra ronda de visitas con los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Partido Justicialista (PJ), la iglesia católica y algunas de las organizaciones sociales ligadas al peronismo que trabajan en los territorios con los sectores populares afectados por las políticas de este gobierno. El denominador común de todos estos encuentros fue la preocupación por la situación actual y la evidencia de que si no hay cambios habrá que mostrar resistencia. Los sindicalistas de la CGT actúan con prudencia, tal como les pidió el Presidente; no obstante, acumulan voluntades para no estar desprevenidos cuando sea el momento de llamar a la primera huelga general contra su gobierno. Los dirigentes que definen los términos de la paz laboral con los funcionarios de la administración de Macri son los mismos que despliegan este abanico de contactos con otros actores para testear el humor social; el mostrador de los trabajadores que atienden los sindicalistas es tan importante como el mostrador del estado.

Allí aparece el diferendo con las representaciones del sindicalismo de base en muchas de las industrias donde colisionan las modalidades de representación obrera que expresan los acuerdos de cúpulas y las luchas en las bases. En la última década, las cúpulas sindicales han peleado mejoras para sus sectores; las bases también han peleado por mejoras en el sitio de trabajo, colocando en no pocas ocasiones a las dirigencias de varios sindicatos ante la disyuntiva de encabezar la movilización o la desmovilización de los conflictos (el cordón industrial de la zona norte del conurbano bonaerense es uno de los ámbitos que mejor ilustra estas tensiones). En la mayoría de los sindicatos en los que se suscitaron estos dilemas, las cúpulas han escogido la última opción. No es casual, entonces, que ahora, cuando las medidas laborales golpean a los trabajadores

en sus sitios de trabajo, la protesta esté alentada desde abajo, y, según los casos, hostigada desde arriba, lo que va endureciendo de a poco las relaciones obrero-patronales.

Modalidades sindicales

Este tipo de tensiones parece más frecuente entre los sindicatos de la CGT que entre los de las dos CTA, dado que a primera vista la brecha entre cúpulas y bases sindicales parece mayor en las organizaciones de la primera que entre las de las otras dos centrales. Podría ilustrarse este punto de vista con el caso de la administración pública nacional, que fue el primer sector afectado por los despidos casi desde el inicio de la gestión de Macri. En este sector comparten la representación gremial varios sindicatos, pero los más importantes son dos: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); el primero está afiliado a la CGT y el segundo está ahora distribuido entre las dos CTA (Autónoma, conducida por Pablo Micheli, y de los Trabajadores, por Hugo Yasky). Al ritmo acelerado con que se recortaron los planteles en ministerios y organismos descentralizados, ATE respondió con huelgas y movilizaciones para lograr reingresos y evitar futuros despidos. UPCN nunca protestó. Aplicando el punto de vista comentado arriba, concluiríamos que ATE lucha por los trabajadores mientras que UPCN se desentiende de ellos para resguardar sus negocios. Falso. Ambos luchan por los puestos de trabajo, pero tienen distintos horizontes y buscan alcanzarlos de diferente manera. ATE va a la protesta e incluye junto a las reivindicaciones de sus afiliados los pedidos de quienes están en la informalidad laboral y sin afiliación; sobre esa plataforma ha organizado más de un paro nacional en el sector y alienta la convocatoria a una huelga general. UPCN no apela a la protesta sino a la negociación por sus afiliados; ha intercambiado moderación salarial por estabilidad laboral para su tropa y por la promesa del pase a planta permanente de un contingente de los suyos que aún carece de estabilidad en el cargo, en el marco de una amenaza constante de ajuste laboral en los ministerios.

Ensayando a partir de este breve comentario una visión de conjunto sobre el desenvolvimiento de los sindicatos, resulta más pertinente considerar que estas organizaciones orientan su acción gremial movidas por distintas concepciones de sindicalismo. Una de ellas, propia de un tipo de *sindicato profesional-asociativo*, traza su horizonte de construcción sobre sus afiliados y promueve la acumulación de recursos para convertirlos en bienes y servicios para ellos; la otra asume una concepción de *sindicato de clase* que busca metas organizativas de carácter político, relacionadas con una visión global de la sociedad, y que sobrepasa la frontera de sus filas de afiliación. Los sindicatos con mayor influencia en la CGT entran en la primera modalidad, mientras que los que están distribuidos en las dos CTA se acercan a la segunda. No se desprende de esta distinción que la lucha sea una prerrogativa exclusiva de los sindicatos de las dos CTA; los de la CGT también luchan, pero el alcance de su lucha reivindicativa privilegia a sus afiliados. Aunque las formas de pelear por sus miembros tienen matices, el conjunto de los sindicatos de la CGT representa a los que están mejor cubiertos por el mercado formal de trabajo; en consecuencia, antes de llamar a la huelga general revisarán una y otra vez las condiciones de su propia tropa. Los sindicatos de las dos CTA, por su parte, se acercan a la segunda opción, dado que apoyan un pie sobre ese sector formal e intentan en paralelo hacer pie también sobre el sector informal. Sus vínculos con organizaciones sociales ligadas a contener la vulnerabilidad de los sectores populares, que en estos meses han recaído en la marginalidad y la pobreza por la informalidad de sus empleos y la amenaza del desempleo, es muestra de ello; también lo es la expresión de la Marcha Federal, ligada tanto a pequeños empresarios y cooperativas de trabajo como a la lucha por los derechos de los pueblos originarios y sus formas de vincularse con la tierra, la economía y el estado, o a la coordinación reciente de las agrupaciones de consumidores en contra del tarifazo.

Hay que señalar, en este sentido, que una novedad del actual triunvirato de la CGT es la convocatoria a las organizaciones de desocupados, informales y cooperativistas agrupadas en la flamante Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que lidera el Movimiento Evita para coordinar reclamos y acciones conjuntas. Como nunca antes desde que la precarización laboral se ha convertido en un rasgo sostenido de la economía argentina, la CGT les abrió las puertas de su histórico salón Felipe Vallese a quienes están fuera de las instituciones formales del trabajo. Acciones de este tipo deben tenerse en cuenta porque,

por un lado, muestran un gesto, poco usual en los sindicatos de la CGT, de echar un vistazo por encima del muro que contiene a los trabajadores registrados, y, por otro, llaman la atención (una vez más) sobre la urdimbre popular que teje y reteje el peronismo, expresado en este caso en el intento de afianzar solidaridades organizativas. He allí, entonces, una novedad en esta CGT colegiada, de consecuencias imprevisibles sobre la transformación del mundo del trabajo y de sus lealtades partidarias y políticas. Un ensayo de estos acercamientos se ha visto en algunas movilizaciones recientes, que conviene analizar.

La organización del descontento

En estos meses hubo tres manifestaciones populares importantes contra la política económica de Macri. La primera de ellas fue el 29 de abril, en vísperas del Día del Trabajador. Reunió en el bajo porteño, cerca del Monumento Canto al Trabajo, a miles de trabajadores, como hacía mucho tiempo no se veía en un acto coordinado por el fragmentado sindicalismo de tres CGT y dos CTA. El acto, de talante predominantemente sindical, no fue noticia por los previsibles discursos de sus oradores contra la política económica, sino por la magnitud de su convocatoria, que sumó además a los partidos del Frente de Izquierda y los Trabajadores y al PJ, y que incluyó la aparición pública de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), emprendimiento liderado por el Movimiento Evita para organizar a los trabajadores informales y desocupados.

Esta central, la CTEP, fue protagonista de la segunda manifestación, el 7 de agosto, durante la celebración católica de la festividad de San Cayetano, el santo del pan y el trabajo. Para esa fecha, llegan anualmente hasta el barrio de Liniers, donde se levanta el templo que lo venera, grandes contingentes de fieles que le piden “pan y trabajo”. Tratándose de una festividad muy arraigada a la religiosidad católica de los sectores populares en la Argentina, la amplitud de cada celebración testimonia también la preocupación de estos sectores por su reclamo básico del bienestar indispensable que proporcionan los alimentos y el trabajo. Desde allí, ese día, marcharon trece kilómetros hasta la Plaza de Mayo, con el lema “Paz, pan y trabajo”, miles de trabajadores informales y desocupados, convocados por la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), para reclamarle al gobierno nacional un cambio en las políticas de ajuste. En el acto de cierre de la movilización, frente a la Casa Rosada, los acompañaron dirigentes de las CGT y las CTA y sectores vinculados a la Pastoral Social de la Iglesia Católica, como muestra de solidaridad con la vulnerabilidad laboral de los que ese día habían marchado; desde estas organizaciones se sostiene que por cada uno de los más de cien mil puestos de trabajo perdidos en el sector formal, otros tres se pierden en el sector informal.

Finalmente, la tercera manifestación fue la Marcha Federal, realizada entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. Como en aquella original movilización de 1994 organizada y liderada por los sindicatos de la CTA y del entonces Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) que encabezara Hugo Moyano entre otros dirigentes de los sindicatos del transporte, cinco columnas de marchantes partieron desde Jujuy (NOA), Posadas y Formosa (NEA), Mendoza (CUYO), Esquel (PATAGONIA-OESTE) y Comodoro Rivadavia (PATAGONIA-ESTE) hasta la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Se realizaron actos en distintos puntos del trayecto, y más de un centenar de sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos, partidos y agrupaciones políticas marcharon hasta llegar al acto de cierre frente a la Casa Rosada. En el acto de cierre no estuvo la CGT, pero sí varios de sus sindicatos, representados incluso por sus principales dirigentes, que compartieron el diagnóstico y la necesidad de incrementar la lucha contra el gobierno de Macri.

La magnitud de la organización de cada una de estas movilizaciones y la diversidad sociopolítica de las organizaciones movilizadas son los rasgos más significativos de estas protestas. El primero tiene que ver con la profusa historia de la movilización social y política en la Argentina, jalonada por distintas capas de organización popular durante el siglo XX, y que se actualiza en circunstancias como éstas. El segundo está ligado al cambio estructural de las clases trabajadoras argentinas iniciado a fines de la década de 1970 y profundizado en la de 1990 con las reformas neoliberales. Aun cuando en la década pasada haya habido una recomposición salarial y laboral muy importante, que mejoró en términos cuantitativos y cualitativos a las clases medias y populares, la cartografía socioeconómica argentina muestra un mapa muy heterogéneo. La emergencia de la CTEP y su marcha desde San Cayetano, la reedición de la Marcha Federal y su diver-

sa composición organizativa, muestran la pulverización de los resortes de afiliación social alrededor de la sociedad salarial que marcó al capitalismo de mediados del siglo XX, incluso en regiones periféricas como América Latina y en particular la Argentina. Es significativo que en ambas haya habido acercamientos de la dirigencia de la CGT; también lo es que no haya organizado ninguna de ellas.

Palabras finales

La matriz estadocéntrica sigue influyendo en el accionar del sindicalismo argentino. Las organizaciones afiliadas a la CGT, en líneas generales, están amoldadas a los negocios con el estado, mientras que las afiliadas a las dos CTA están acostumbradas a cuestionar al estado, tanto por lo que hace como por lo que no hace.

Hay allí una inercia de estas organizaciones a actualizar con sus acciones prácticas hundidas en el fondo histórico de sus luchas y conquistas. Una vez logradas, generan intereses y valores con que se negocia y se enfrenta a los adversarios, que sedimentan entre sus integrantes y constituyen legados para el futuro de sus organizaciones. Las instituciones del mundo del trabajo consolidadas por una profusa legislación a mediados del siglo XX son una conquista que el conjunto de los sindicatos defiende a capa y espada, al margen de la forma como conciben la actividad sindical y de la central obrera donde se afilien. No obstante, hay coyunturas críticas que abren opciones de cambio institucional y luego de las cuales no es fácil volver atrás, entre otras razones porque los incentivos y valores que van corporizándose alrededor de nuevos conjuntos de prácticas dejan en el camino gran parte de aquellas que se realizaban antes. En ese sentido, los horizontes de los sindicatos de las CGT y los horizontes de los sindicatos de las CTA son distintos desde su división a comienzos de los noventa. Sus visiones sobre lo que es y sobre lo que debe hacer un sindicato difieren: hay dirigentes importantes, como los hermanos Moyano, que estuvieron presentes en el acto de cierre de la Marcha Federal, pero eso no los compromete ante la inversión movilizadora de los sindicatos de la CTA, que caminaron desde cinco puntas diferentes del territorio hasta el centro político de la Argentina. A la inversa, desde la CTA y sus sindicatos se insiste sobre los montos de bienestar que deben garantizárseles a todos los trabajadores, pero eso no lleva a sus dirigentes a intervenir en emporios financieros que diversifican intereses y beneficios. Las políticas de los gobiernos condicionan las reacciones de los actores sociales y económicos, como los sindicatos, pero éstos responden a las propuestas de cambio que reciben según sus valoraciones y horizontes de construcción social y política.

Esto se aplica, incluso, para los gobiernos con aires de novedad, como el de Macri, que para disuadir la mentada huelga general ha rescatado la trillada propuesta de una Mesa de Diálogo Social, a través de la cual sindicatos y empresarios participarían en la definición de algunas líneas de la economía. Puesto en estos términos, se trata de una movida extemporánea, pues si a ese encuentro sólo son convocados los empresarios de la UIA y los sindicalistas de la CGT, la representación será muy estrecha. Las expresiones que se hicieron ver y escuchar en la marcha durante la festividad de San Cayetano y en la Marcha Federal dan cuenta de una estructura social y económica heterogénea, y en proceso de cambio aún. Viene entonces a cuento la pregunta por la viabilidad social y política de este cambio de rumbo. Considerando que, como ha señalado recientemente Maristella Svampa¹, las alianzas sociales del gobierno son bastante estrechas aún y no hay muchas señales acerca de quiénes habrían de ser convocados a sumar su apoyo, cabe indagar por el modo en que el gobierno piensa darse un sustento social que le ayude a revalidar títulos en las elecciones del próximo año. Dicho de otro modo, cómo viabilizará este conjunto de medidas que han empobrecido a muchos, y ha limitado el consumo de muchos otros si su arco de interlocutores se restringe a los más beneficiados o, por lo menos, a los que casi no han sido perjudicados, y que cada vez son menos.

¹ Svampa, Maristella, “El (nuevo) desborde plebeyo” en *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, septiembre de 2016.